

S-2022

Proceso:

Demandante:

Demandados:

Radicado:

Asunto:

Verbal

Alejandra María Monsalve Uribe

Lucía Beatriz Castro Valencia y otro

05001 31 03 022 **2019 00291 03**

Confirma sentencia impugnada

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, veinticuatro (24) de agosto del dos mil veintidós (2022).

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 27 de agosto de 2021 mediante la cual el Juzgado Vigésimo Segundo Civil del Circuito de Medellín dirimió la controversia en el proceso Verbal con pretensión declarativa de Responsabilidad Civil Médica, promovida por Alejandra María Monsalve Uribe en contra de la Dra. Lucía Beatriz Castro Valencia y la Clínica Antienvjecimiento S.A.S. Labor jurisdiccional que se acomete en el siguiente orden.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones. La señora Alejandra María Monsalve Uribe presentó demanda de responsabilidad civil médica en contra de la Dra. Lucía Beatriz Castro Valencia y la Clínica Antienvjecimiento S.A.S., para que -por el trámite del procedimiento verbal-, se les declare responsables por los daños ocasionados en virtud de un procedimiento estético realizado en julio 24 del año 2009, a través del cual se le inyectó a la demandante una sustancia desconocida en el rostro. Advierte, que la codemandada Dra. Castro Valencia fue quien le realizó el procedimiento, mientras que la Clínica Antienvjecimiento S.A.S. es la actual propietaria del establecimiento Clínica Antienvjecimiento S.A.S., sitio donde se llevó a cabo el procedimiento. Solicita entonces el resarcimiento de las siguientes sumas generadas a razón de los siguientes conceptos: *“...100 smlmv por concepto de perjuicios morales; 283 smlmv por concepto de daño a la salud; 120 smlmv por concepto de tratamientos que se debe hacer la demandante y las consecuencias de los mismos...”*.

1. Fundamentos Fácticos. Los hechos se sintetizan de la siguiente manera: **1.1.** Que la demandante siempre confió sus tratamientos a la Clínica Antienvjecimiento, en ese entonces de propiedad de la Dra. Lucía Beatriz Castro

Valencia, quien para julio de 2009 le realizó una aplicación de *botox en el área frontal, corrugador, proceros y orbicular en ambos ojos y se aplicó ácido hialurónico, en las subodinas laterales de los labios, tratamiento denominado SURGIDERM 30XP 0.8 ML. LOTE XP 30532757, con fecha de vencimiento de 20/11/2011*, de acuerdo al consentimiento informado signado por la demandante.

1.2. Que acudió a las instalaciones de la clínica demandada, debido a que sentía unas bolas y dolor en los surcos nasogenianos, por lo que fue tratada con radiofrecuencia y láser de helio, debido a que no se notaban malformaciones, tratamiento que fue prolongado de forma indebida, debido a que los colegas de la Dra. Castro Valencia le sugirieron que realizara una biopsia, paso que fue omitido por la galena.

1.3. Que, para el 11 de agosto de 2010, la actora acudió a la clínica demandada a realizarse un procedimiento que se denomina microdermo con punta de 100, y se dejó consignada en la historia clínica lo siguiente: *“en el surco derecho se le nota disminuido el abultamiento y en el izquierdo no se nota mejoría.”*.

1.4. Que luego de diferentes procedimientos con helio y radiofrecuencia y, tras no acatar las recomendaciones de sus colegas y pese a la aparición de masas que generaban deformidad en el rostro, la actora optó por acudir al cirujano plástico dr. David Delgado, quien encontró que la actora tenía una enfermedad por modelantes, a causa de una sustancia que lleva diez años en su cara, que no es ácido hialurónico y que le desencadena cambios de contorno y deformidad por reacciones inflamatorias persistentes, mismos que probablemente sean permanentes, debido a que la sustancia no puede ser extraída 100% por ningún método.

1.5. Advierte entonces que la sustancia que le aplicaron en su rostro no corresponde al SURGIDERM, toda vez que según la sociedad Allergan Colombia SAS, para el año 2009 el *LOTE XP 30532757* no había salido al mercado, desconociéndose hasta ahora qué fue lo que le aplicaron, ya que las demandadas no le respondieron la solicitud que elevó en ese sentido, lo que ha traído consigo innumerables perjuicios -como la deformidad de su cara-, por lo que requiere el sometimiento a tratamientos como cirugías y costosos medicamentos que, de todas maneras, no van a garantizar su normalidad. Así mismo, presenta secuelas

emocionales que han menoscabado su salud mental, generándose sentimientos de indefensión, desesperanza y afectación de sus creencias sobre sí misma.

2. Actuación procesal. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil del circuito de Medellín, quien admitió la demanda mediante auto del 30 de octubre de 2019. Allí ordenó la notificación de los demandados.

2.1. La Clínica Antienvjecimiento advirtió que no le asiste responsabilidad alguna frente a hechos, mismos que no estaban bajo su control, por la sencilla razón de que ni siquiera existía como persona jurídica para esa época, amén que es una sociedad comercial constituida mediante Documento Privado del 1 marzo de 2010, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 6 abril 06 de 2010. Agregó que, según lo manifestado por la Dra. Lucía Castro, el producto aplicado a la demandante el 24 de julio de 2009 fue *surgiderm* del laboratorio Allergan, el cual fue presentado, abierto y aplicado en presencia de la paciente y la enfermera Martha Orozco. Que, al momento de ejecutar dicho procedimiento, ella explicó a la paciente todos las recomendaciones y riesgos, tal como consta en el consentimiento informado.

Que, el medicamento aplicado a la demandante había sido adquirido por la Dra. Lucía Castro al distribuidor en Colombia de laboratorios Allergan, denominado Panagro SAS, tal como se deduce de los documentos aportados como prueba. Para que no exista ninguna duda acerca del producto aplicado a la demandante el 24 de julio de 2009, se recuerda que el medicamento *surgiderm* era para ese entonces y es reconocido hoy como uno de los mejores en la comunidad científica, destacándose por ser un gel a base de ácido hialurónico reticulado, homogéneo, no granulado, que en Colombia fue registrado ante las autoridades sanitarias y de control de medicamentos inicialmente por otro titular desde el 22 de junio de 2006 y transferido a laboratorios Allergan de Colombia el 9 de enero de 2008. Adujo entonces que el medicamento aplicado a la demandante, dirigido a disminuir arrugas medianas y definición labial, corresponde a un producto legalmente comercializado en Colombia, con todos los permisos sanitarios y que en el mundo se encontraba ampliamente avalado, razón por lo cual resulta descabellado sugerir si quiera que el mismo es un “biopolímero”.

Desdice lo manifestado por la demandante, quien afirma que el síntoma le dio después de haberse aplicado el SURGIDERM, lo cual es absolutamente falso, pues la Sra. Monsalve Uribe continuó asistiendo a entrevistas con la Dra. Castro hasta casi dos meses después, sin que en dicho lapso se observara anomalía alguna y, adicionalmente, en el momento en que supuestamente surgieron las anomalías por ella referidas, descartadas además en el examen médico practicado, el Surgiderm ya había desaparecido de su cuerpo, por tanto, no existe nexo causal entre la aplicación del medicamento por la Dra. Lucía Castro y los supuestos síntomas exteriorizados más de un año después del procedimiento.

Como excepciones de mérito formuló las siguientes: **i)** Diligencia y cuidado por parte de las demandadas; **ii)** Imposibilidad de la imputación jurídica del daño; **iii)** Ausencia de nexo causal; **iv)** Indebida y exagerada tasación de perjuicios; **v)** prescripción; **vi)** Falta de legitimación en la causa; **vii)** Buena fe de las demandadas; **viii)** Mala fe en cabeza de la demandante y la **ix)** genérica.

2.2. En similares términos contestó la demanda la Dra. Lucía Castro Valencia, blandiendo como excepciones **i)** ausencia de culpa; **ii)** adecuada práctica médica; **iii)** improcedencia de la imputación jurídica del daño; **iv)** ausencia de nexo causal; **v)** indebida y exagerada tasación de perjuicios.

3. La sentencia apelada. La sentencia del Juzgado Vigésimo Segundo Civil del Circuito fue denegatoria de las pretensiones, advirtiéndolo, además, la falta de legitimación por pasiva de la Clínica Antienvjecimiento S.A.S.

En lo medular, la señora jueza se ocupó de analizar inicialmente la legitimación en la causa por pasiva de la hoy persona jurídica Clínica Antienvjecimiento S.A.S., la cual halló acreditada en virtud a que, cuando ocurrió la enajenación del entonces establecimiento de comercio Clínica Antienvjecimiento, no existía un pasivo contable proveniente de una responsabilidad civil médica solidaria que tuviera que ser asumido por la Clínica Antienvjecimiento S.A.S., máxime si la demanda se había presentado en julio del año 2019. Recordó, que la solidaridad nacía en virtud de la ley o en virtud de la convención de las partes y no existía ley que atribuyera solidaridad por virtud de la imposición de un sello de la Clínica Antienvjecimiento S.A.S. en calidad de sociedad legalmente constituida,

adicionalmente, que mal podría figurar una acreencia que apenas está en debate, es decir, que podía o no constituirse.

Seguidamente, pasó la funcionaria a dejar claro que el caso se debía regir por la culpa probada, pese a que el perjuicio reclamado derivaba de un procedimiento estético de aplicación *de botox y ácido hialurónico, en las subodinades laterales de los labios, tratamiento denominado SURGIDERM 30XP 0.8 ML. LOTE XP 30532757*, ello, por cuanto no existía prueba de que la Dra. Castro Valencia en el contrato verbal de prestación de servicios médicos, se hubiere comprometido con un resultado, por modo que la tarea de la actora era demostrar la configuración de los elementos necesarios para la estructuración de la responsabilidad civil médica demandada.

Al pasar entonces por el estudio de la prueba documental obrante en el proceso, a saber, historia clínica, el consentimiento informado, la factura donde constaba el producto aplicado firmado por la actora y el testimonio de médicos cirujanos que en su momento valoraron a la paciente, la funcionaria encontró que, pese a que la resonancia y la biopsia mostraban la existencia de un líquido en el rostro de la actora, no existía posibilidad histopatológica de conocer qué tipo de líquido era, su origen o el tiempo que llevaba en el rostro de la actora. Frente a la existencia en Colombia del producto denominado Surgiderm, para la fecha del procedimiento, indicó que existían certificaciones de los gerentes de los laboratorios como Allergan y etiquetas de distribuidores autorizados como Panagro S.A.S., donde constaba que la doctora que realizó el procedimiento compró o adquirió el *Surgiderm 30XP 0.8 ML. LOTE XP 30532757*, previo al 24 de julio de 2009, conforme a lo cual, indicó que la prueba indicaba que la Dra. Lucía Castro Valencia sí le había aplicado el producto de que tratan las etiquetas.

A esto sumó que la actora se había realizado diferentes procedimientos estéticos faciales, posterior al 24 de julio de 2009, tales como perfilamiento de nariz y labios, los cuales impedían tener certeza sobre lo que causó la patología que hoy día ella presentaba. Acorde a lo anterior, concluyó, que en el caso no se configuraron los elementos de la responsabilidad civil médica demandada.

4. Recurso de apelación. La sentencia fue apelada en término por la apoderada de la parte demandante. Concedido el recurso de apelación en primera instancia, el mismo fue admitido por este Tribunal, seguidamente, se le otorgó el término de

rigor para la sustentación, el cual recorrió la parte recurrente de la manera como pasa a compendiarse:

Que la funcionaria de primera instancia le dio una interpretación errónea a la jurisprudencia, ya que dice que como la doctora Lucía Castro, en este tratamiento estético, no se obligó al resultado, luego, la obligación es de medio, cuando se debe entender es que si el médico en una de las cláusulas del contrato manifiesta que no es posible por la naturaleza del tratamiento estético el resultado, es cuando su responsabilidad cambia de resultado a medio, de lo contrario, si no existe esta cláusula, entonces, la responsabilidad va a ser siempre de resultado

Advierte que la sociedad Clínica Antienvjecimiento S.A.S. es solidariamente responsable junto a la Dra. Lucía Castro Valencia, de los perjuicios ocasionados a la demandante, amén de que, cuando se adquiere un establecimiento de comercio no solo se adquieren derechos, también se adquieren obligaciones; que *“...no solo se adquiere lo bueno, también lo malo y de acuerdo a lo anterior no podemos pretender que el dueño del establecimiento de comercio no responda por algo que fue anterior a su personería...”*

Que, para comprobar de forma fehaciente que a la actora no se le aplicó ácido hialurónico SUGIRDERM 30XP 0.8 ml. LOT XP30532757 con fecha de vencimiento 20/11/2011, solo se debe verificar un punto y es que la fecha de aplicación esté dentro de los 24 meses a la expedición del producto, es algo simple, algo matemático, una prueba totalmente objetiva.

Que, no es casualidad que la región afectada -que aún se mantiene después de 13 años-, sea la misma región donde se encontró la alojenosis iatrogénica y, de acuerdo a las explicaciones del Dr. Vargas (testigo de las partes demandadas) y del Dr. Ayala, se tiene que si los biopolímeros se encuentran en el área donde fue aplicado, entonces, lo más probable es que le hayan inyectado una sustancia desconocida, puesto que los biopolímeros no siempre migran.

Asesta que la Dra. Lucía Valencia Castro fue negligente por cuanto: 1. *El 24 de julio de 2009 le inyecta una sustancia desconocida.* 2. *El 25 de agosto de 2009 mi mandante presenta una reacción de abultamiento en los surcos nasogenianos y en el labio, reacción que no es común en la aplicación de ácido hialurónico.* 3. *El 18 de julio de 2010 la doctora Lucía Castro le hace a mi mandante un examen*

físico, en el mismo lugar donde hace un año le aplicó un relleno y encuentra endurecimiento de ambos carrillos y leve dolor, en el interrogatorio de parte explicó un poco más y dijo que la zona donde le aplicó el tratamiento esta indurada y con leve dolor. Reacción que no es común del ácido hialurónico, nunca se han visto esos casos y no existe literatura científica al respecto. 4. El 30 de julio de 2010 habló con otros colegas del caso y ellos le recomiendan que la paciente se haga una biopsia, desecha tal recomendación. No envió medicación a mi mandante para hacer medidas antiinflamatorias, como lo expusieron los médicos que dieron su concepto en el proceso. 6. La doctora Lucía Castro había recibido varias capacitaciones por parte de Allergan, sabía que el producto tenía una vida útil de 18 a 24 meses, y aplica un producto que tiene una fecha de vencimiento superior a los 24 meses. 7. Altera la historia clínica de mi mandante, colocando un sticker de un producto comercializado en Colombia en el 2010, que no estaba en el país en el 2009.

Finalizó señalando que la Dra. Lucía casto Valencia no prestó atención a la sintomatología que la señora Alejandra Monsalve presentó de forma inmediata y probada desde la cuatro (4) semanas que le hizo el tratamiento, como tampoco ordenó exámenes diagnósticos y descuidó totalmente a la paciente, aspectos por los cuales debe hallársele civil y solidariamente responsable con la Persona Jurídica demandada.

Esbozados de esta manera los antecedentes que dieron lugar a la decisión recurrida y las razones de disenso que sustentan la alzada, procede la Sala a desatar el recurso con fundamento en las siguientes,

I. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales. Encuentra la Sala satisfechos los requisitos o presupuestos procesales para que pueda abordarse el estudio de la apelación interpuesta por la parte demandante. Además, no se observan irregularidades procesales que tipifiquen una nulidad. De igual manera, se le ha permitido a la parte exponer su tesis en desarrollo argumentativo de los reparos concretos que formulara frente a la sentencia de primera instancia.

1.1. De la legitimación en la causa de la Clínica Antienvjecimiento S.A.S. Contrario a lo elucubrado en este punto por la señora jueza, hemos de ver que

los hechos de la demanda indican que si bien -en principio- la persona jurídica aquí demandada Clínica Antienvjecimiento S.A.S., no existía como tal para la fecha en que la actora se realizó el procedimiento estético facial en julio 24 de 2009, pues apenas fue creada como entidad empresarial en marzo del año 2010, según consta en el certificado de existencia y representación y no existe ninguna prueba que sugiera que ésta a su creación decidió voluntariamente asumir una deuda o subrogarse en los efectos de un contrato de prestación de servicios de un médico particular, sin embargo, para el Tribunal no llama a duda que la demandante en varios hechos de su demanda y, además, es lo que se observa en la historia clínica, narra que fue atendida con posterioridad al interior de la clínica estética en función del objeto social de esta para buscar revertir la alojenosis iatrogénica que le había causado con anterioridad la Dra. Castro Valencia, por lo que ahora la persona jurídica demandada junto con la doctora Lucía Castro Valencia, **quien a su vez es gerente suplente**, faltaron al correcto ejercicio de la práctica médica estética, no solamente la galena por el tratamiento inicial sino ambas por el tratamiento posterior, lo que está dentro de la actividad económica principal de la persona moral.

Por consiguiente, para la sala es claro que hay “...*identidad entre el compromiso adquirido por la clínica (persona jurídica codemandada) y el del médico que con la aquiescencia (en el caso) del acreedor procedió a la ejecución del tratamiento, en su condición de agente o “sustituto”, como lo llama el recurrente, de la citada sociedad. De suerte que si el objeto de la obligación es exactamente el mismo, razón por la que demanda un comportamiento uniforme, guiado por un mismo fin, cual es el cumplimiento de los deberes contractuales originalmente adquiridos, lógicamente se debe predicar una unidad de tratamiento jurídico en el ámbito de la responsabilidad para la clínica y el médico tratante*, pues mientras que la primera responde por el incumplimiento del contrato que efectivamente celebró, el segundo lo hace como ejecutor fallido de idéntico objeto prestacional. De ahí que se esté, como lo dice la doctrina, frente a una responsabilidad de índole contractual “indistinta” para ambos sujetos, **puesto que es tan contractual el origen de la obligación como su ejecución.**

Desde luego que esta unidad de tratamiento tiene asidero no sólo en la estructura fáctica de la relación obligacional establecida entre las partes del proceso, sino en los efectos que a partir de ella se derivan, **porque con independencia del vínculo existente entre la clínica y el médico, lo cierto**

es que la atención al paciente (acreedor) por dicho profesional, fue dispuesta por la primera, se repite, con el consentimiento del último. De modo que la culpa del señalado agente es la culpa de la sociedad, en los términos del art. 1738 del C. Civil, que en atención al vínculo existente con el agente, estatuye como parte integrante del hecho o culpa del deudor, el hecho o culpa del agente, porque al fin de cuentas, como quedó dicho, se trata de la responsabilidad derivada del incumplimiento de una misma prestación, que por lo demás lesiona el mismo interés y produce el mismo daño, lo cual como seguidamente se analizará, incide en el campo de la solidaridad.

Respecto de este tema, es decir, el de la solidaridad, al contrario de lo que piensa el recurrente, la Corporación entiende que **ésta nace de la propia ley, que es una de sus fuentes, (art. 1568 del C. Civil), concretamente de la aplicación del principio general consagrado por el art. 2344 del C. Civil, eficaz para todo tipo de responsabilidad**, porque lo que hizo el Tribunal no fue otra cosa que a partir de la demostración de la propia culpa del médico, deducir una responsabilidad directa, concurrente con la culpa contractual, no controvertida en este cargo, de la otra codemandada. En otras palabras, lo claro es que la solidaridad no surgió de una inexistente pluralidad de sujetos contratantes, como lo plantea el impugnante, **sino de la propia ley, o sea el art. 2344, en tanto el juzgador consideró que el perjuicio había sido consecuencia de la culpa cometida por dos personas, una de ellas el médico encargado del tratamiento.** Por supuesto que para arribar a esta nueva conclusión, vuelve a jugar papel determinante la estructura y el vínculo obligacional que hubo de quedar verificado, porque es la unidad de objeto prestacional y la relación existente de los codeudores entre sí y de éstos con el acreedor, en la forma como quedó averiguada, ligadas a la identidad del interés lesionado y del daño producido, la que permite hacer el predicamento de solidaridad que antes se expresó, porque como explica Adriano de Cupis al ocuparse de situaciones como la que ahora se estudia, para poder sostener la tesis de la solidaridad, “Es decisivo... que tales comportamientos concurren en la lesión del mismo interés y en la producción del mismo daño”. Precisamente, agrega, “la diversidad de título, es decir, del fundamento de la responsabilidad, no excluye su solidaridad, porque deriva de comportamientos concurrentes a la producción del mismo daño...”.¹

¹ CSJ. Casación del 11 de septiembre del 2002, Expediente 6430, con ponencia de José Fernando Ramírez Gómez

1.2. Luego, si conforme las reglas civiles de la responsabilidad y lo decantado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la legitimación es la vocación que tiene la persona o sujeto convocado para ser vinculado y llamado al proceso a encarar las pretensiones de la demanda, dichas calidades las cumple a cabalidad la entidad empresarial Clínica Antienvjecimiento S.A.S., como que, por el hecho que el entonces establecimiento de comercio Clínica Antienvjecimiento no existiere como persona jurídica para el 24 de julio de 2009, no es razón suficiente para que el Tribunal acepte su falta de legitimación, merced a que, según la profundidad fáctica del presente caso, la conducta dañina no solo ocurrió en el procedimiento estético mismo, sino con la deficiente atención prestada en la Clínica con posterioridad a su realización, concretada en la indebida interpretación de los síntomas que presentaba la actora en su rostro, como inflamación y abultamiento de los surcos nasogenianos, según narra la actora en las atenciones brindadas en el año 2010, cuando consultó a raíz de la aplicación de una sustancia desconocida en aquel procedimiento, omitiéndose por parte del centro empresarial estético ya constituido como S.A.S., así como por su agente la Dra. Lucía Castro Valencia –también en calidad de médico tratante-, un tratamiento clínico oportuno y compatible con la patología, pues según narra, solo le hacían radiofrecuencias, lo cual facilitó su complicación, llegando al extremo de producirle una secuela denominada alojenosis iatrogénica que derivan en abultamientos y malformaciones en su rostro.

Nótese entonces que más allá de cuestionarse en la demanda por una determinada relación jurídica entre la Doctora Lucía Castro Valencia y la sociedad demandada Clínica Antienvjecimiento S.A.S., el perjuicio reclamado se fundamenta en la negligencia de ambas codemandadas y, por lo tanto, como se dijo, es también evidente la legitimación en la causa por pasiva de la sociedad, distinto es que dentro del curso procesal y por virtud de su actividad defensiva, ora por falta de acreditación de los presupuestos de la responsabilidad demandada, se establezca que no es responsable de los cargos endilgados por la parte demandante. En este aspecto se modificará la sentencia.

2. Antes de resolver el recurso, veamos entonces algunas consideraciones acerca del instituto jurídico en cuestión.

2.1. De la Responsabilidad Médica. Tipo de Obligación en la Responsabilidad Médica del Cirujano Plástico. Diferentes son las posturas

que de antaño jurisprudencia y doctrina han asumido para explicar y edificar la responsabilidad de los médicos y de las entidades de salud frente a los eventos nocivos originados en el cumplimiento de sus actividades, de cuya evolución va quedando claro que no es siempre con el mismo sistema que se ha de valorar cada caso, sino, por el contrario, que es menester acudir a una juiciosa mirada del evento concreto para hacer venir, según la relación de causalidad y teniendo en cuenta sus individuales particularidades, la regla que mejor acompase a la justicia, como quiera que la heterogeneidad de las circunstancias que se perfilan en la ejecución de la medicina –aún en la estética o satisfactiva-, tornan difícil generar normas homogéneas, tal cual, *verbi gratia*, lo expuso en la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 30 de enero de 2001, con ponencia del Dr. José Fernando Ramírez Gómez, en el expediente 5507.

2.2. Ahondando pues en el tópico de las fuentes, se ha discutido doctrinariamente, si el contrato de prestación de servicios médicos genera obligaciones de medio o de resultado para concluir que el médico no puede garantizar a ciencia cierta un resultado, por lo que es el paciente quien corre con la carga de la prueba para demostrar esa relación de causalidad entre el acto culposo del médico y el resultado dañoso.

Tratándose de obligaciones que emanan de un contrato, no puede pasar desapercibido tampoco, que este reporta beneficios recíprocos para ambas partes, por lo que el deudor responde hasta de la culpa leve y le incumbe demostrar que en la prestación del servicio actuó con diligencia, pericia, prudencia, etc. o alegar caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero para quedar eximido de responsabilidad. (Arts. 63 y 1604 del Código Civil). Sin embargo, la presunción que emana de dicha regla no es posible aplicarla siempre y en todos los casos a la responsabilidad médica, toda vez que la Corte ha enfatizado “...**la improcedencia de aplicar en ésta materia, por regla de principio, la presunción de culpa prevista en el artículo 1604, pues de conformidad con el inciso final de dicho precepto, priman sobre el resto de su contenido “las estipulaciones de las partes” que sobre el particular existan**”. (CSJ. Casación de enero 30/2001, exp. N° 5507).

Como acaba de plantearse, la responsabilidad médica debe analizarse con parámetros diferentes a la surgida en otros actos o contratos. Así lo ha dado a

entender la doctrina cuando hace alusión al nexo causal que debe enlazar el obrar médico con el daño:

“...de manera que éste debe haber sido producido causalmente por la conducta del médico, ya sea por acción o por omisión...”

“...A diferencia de lo que sucede en otros campos, en el ámbito médico la conexión causal entre una acción y un determinado resultado debe ser establecido con arreglo a criterios científicos. Dada la índole de las cuestiones que se dilucidan y las características del hecho generador del daño, únicamente es la ciencia médica la que puede verificar si un hecho puede producir regular y normalmente y conforme el curso científico causal, un determinado resultado. Sólo la ciencia legitimará la comprobación de un curso causal que desde el antecedente lleve al consecuente...”

“...Ese contenido específico de la medicina impone que el “hacer” profesional del médico se integre con los métodos, técnicas y procedimientos por la ciencia médica, desarrollando una conducta acorde con la misma, sin perjuicio de la discrecionalidad científica que le permite optar entre distintas alternativas que la medicina admite, conforme el desarrollo científico progresivo ...”

“...De allí que el médico solo satisface (cumple jurídicamente) su prestación, mediante una actividad técnica y científicamente adecuada, que normal y ordinariamente pueda conducir a cierto resultado, aunque este no pueda garantizarse...”

“...Si el médico actúa conforme a un criterio de discrecionalidad científica, optando por alguna de las variables objetivamente idóneas de acuerdo a las reglas de la medicina y conforme a la adecuación de las circunstancias en concreto, no introduce causalidad alguna para la producción del daño...”²

2.3. Ahora bien, la responsabilidad médica en torno a la naturaleza de las obligaciones del médico cirujano plástico se ha trasladado a los estrados judiciales del país y ha provocado un sin número de pronunciamientos de nuestro máximo Tribunal en la jurisdicción ordinaria, Corporado que inicialmente se inclinó con ahínco, por la tesis que se trataban de obligaciones **típicamente de medios**; posteriormente, abrazó la tesis de que eran obligaciones de resultado, para luego enlistarse, incluyendo la reciente decisión de la H. Corte Suprema en sede de casación SC7110-2017 con ponencia del Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona-, en la teoría de quienes escudriñan las obligaciones de los cirujanos estéticos adquiridas en cada caso particular miradas a trasluz del pacto contractual, para determinar a qué clase corresponden, esto es, si son de medio o son de resultado.

2.3.1. Explica al respecto la Corte Suprema de Justicia en la referida sentencia:

². WEINGARTEN Cecilia. Revista de Responsabilidad Civil y del Estado No. 5 de julio de 1998.

"5.7. Es claro, entonces, que por regla de principio, los médicos se obligan a realizar su actividad con la diligencia debida, esto es, a poner todos sus conocimientos, habilidades y destrezas profesionales, así como todo su empeño, en el propósito de obtener la curación del paciente o, en un sentido más amplio, a que éste consiga en relación con su salud o con su cuerpo el cometido que persigue o anhela, sin que, por lo tanto, se reitera, como regla general, queden vinculados al logro efectivo del denominado "interés primario" del acreedor -para el caso, la recuperación de la salud o su curación-, pues su deber de prestación se circunscribe, particularmente, a la realización de la actividad o comportamiento debido, con la diligencia exigible a este tipo de profesionales.

5.8. No obstante lo anterior, en desarrollo del principio de autonomía privada pueden presentarse casos, valga precisarlo, no solamente en el campo de la cirugía plástica con fines estéticos o de embellecimiento, en los que el médico, **por decisión propia y consciente, adquiera el compromiso de lograr u obtener un resultado específico**, esto es, que se obligue para con el paciente a la consecución de un fin determinado, supuesto en el que, como es obvio entenderlo, la obligación a su cargo se tipifica como de resultado. De igual forma, existen determinadas actuaciones médicas, en las que la finalidad perseguida se puede obtener con la ejecución de la conducta convenida y en las que la presencia de elementos contingentes es mínima, lo que conduce, en tales supuestos, a que se generen obligaciones de resultado. Piénsese al respecto, v.gr., en la colocación de un aparato ortopédico, la inmovilización de una extremidad, el implante de un mecanismo anticonceptivo, las labores médicas de certificación o los análisis de laboratorio, entre otros, en los que el componente de aleatoriedad en la realización del interés del acreedor está prácticamente ausente.

5. 9. Según se aprecia, la específica caracterización del deber que surge para el profesional de la medicina como una obligación de resultado puede derivar de **los alcances que tenga su compromiso en el momento de convenir el respectivo contrato**, y en algunos eventos particulares de la propia naturaleza de la intervención, **pero sin que se puedan establecer al respecto reglas pétreas o principios inmodificables.**

5.10. Para el caso de la cirugía plástica con fines meramente estéticos, por lo tanto, **puede darse el caso de que el médico se obligue a practicar la correspondiente intervención sin prometer o garantizar el resultado querido por el paciente o para el que ella, en teoría, está prevista;** o de

que el profesional, por el contrario, **sí garantice o asegure la consecución de ese objetivo.**

*En el primer evento, la obligación del galeno, pese a concretarse, como se dijo, en la realización de una cirugía estética, será de medio y, por lo mismo, su cumplimiento dependerá de que él efectúe la correspondiente intervención con plena sujeción a las reglas de la *lex artis ad hoc*, en el segundo, la adecuada y cabal ejecución de la prestación del deudor sólo se producirá si se obtiene efectivamente el resultado por él prometido³...*

*Acorde a lo anterior, el simple mejoramiento del aspecto físico de una paciente no es estribo suficiente para catalogar la obligación del cirujano como de resultado, pues, adicionalmente, este **debe prometer o garantizar expresamente**, que la intervención quirúrgica no tendrá ninguna complicación, en palabras de la H. Corte Suprema en la sentencia que trae a colación el mismo recurrente, deja sentado como premisa normativa que: “...en el campo contractual, la responsabilidad médica descansa en el principio general de la culpa probada, **salvo cuando en virtud de las “estipulaciones especiales de las partes” (artículo 1604, in fine, del Código Civil), se asumen, por ejemplo, obligaciones de resultado**, ahora mucho más, cuando en el ordenamiento patrio, el artículo 104 de la Ley 1438 de 2011, ubica la relación obligatoria médico-paciente como de medios...”*

3. El debate judicial. Sin más preámbulos, al emprender entonces la función colegiada frente a la censura vertical que nos reúne, palmar es que del análisis de la providencia de primer grado que desestimó las súplicas del escrito introductor de la demanda, refulge **el problema jurídico** que se plantea en el presente asunto, el cual gira en torno a las obligaciones contraídas por la médica cirujana Dra. Lucía Castro Valencia y que la parte demandante con vehemencia alega que son en todo caso obligaciones de resultado, para de ahí advertir que el procedimiento estético no fue acorde a lo concertado con la médico tratante.

3.1. Como bien lo narra la demanda y, además lo confiesa la actora Alejandra María Monsalve Uribe en su interrogatorio, fue ella quien buscó en forma privada a la esteticista para realizarse un procedimiento estético no invasivo consistente en una terapia facial combinada de Botox y Surgiderm (relleno facial con ácido hialurónico) y con ella contrató, para luego convenir el procedimiento, por ende,

³ Corte Suprema c/ Justicia, Sentencia 5 de noviembre de 2013, M, P: Arturo Solarte Rodríguez, Exp, 2001-3103-005--2005-00025-01. Citada en sentencia SC7110-2017 Radicado 05001-31-03-012-2006-00234-01 M.P. Luis Armando Tolosa Vilabona, compartida por el recurrente.

baste entender que el ofrecimiento que hizo la médica cirujana de sus conocimientos en el ramo estético no invasivo y que, posteriormente, fueron utilizados por cuenta de la paciente, en este caso, la señora Alejandra Uribe, se consagra desde la óptica contractual, la cual se materializa en la realización del procedimiento sobre la humanidad de la paciente.

3.2. En tal virtud, a falta de huella documental donde se plasmaran los perfiles y alcances de ese vínculo obligacional de prestación de servicios estéticos, no cabe duda que el documento denominado consentimiento informado, cobra relevancia jurídica al interior del presente proceso, pues, a través del mismo, es que se puede analizar el **contenido prestacional** asumido por el médico y aceptado por la paciente, sin que sea de recibo lo alegado por la recurrente en el sentido que fue un formato preelaborado por el laboratorio Allergan S.A.S. y, bajo ese entendido, solo lograría exonerar de responsabilidad a este laboratorio, pues, en puridad, lo importante es que se pueda deducir probatoriamente que, a través de él, se haya brindado un servicio médico estético no invasivo para el cual la paciente Alejandra María Monsalve Uribe, estaba informada y preparada.

En efecto, al leer con detenimiento el documento denominado consentimiento informado, signado tanto por la doctora Lucía Castro como por la aquí demandante, se puede observar que la galena fue consciente de estas contingencias y, por eso, dejó consignado en él: *“...estoy consciente que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y reconozco que a pesar de que el médico **me haya informado adecuadamente las posibilidades del alcanzar los objetivos del tratamiento, no se puede afirmar que los resultados son garantizados...**”* (cfr. fl. 63 exp. digital). En ese orden, contrario a haber pactado expresamente la obtención del fin perseguido, en el aludido documento se puso de presente a la paciente que además de generar riesgos, leves y severos, los resultados del procedimiento no eran absolutamente exactos, por lo que no se podían garantizar.

Por consiguiente, la señora Alejandra Monsalve Uribe, en un acto de consideración consigo misma, tenía todo el derecho de preguntarle a su médica elegida por dichos procedimientos: Aplicación de *Botox* y *Surgiderm* y ella, el deber de responder a cualquier inquietud que se le formulara respecto de tales procedimientos y sus alcances. Pero, en los hechos de la demanda, o en la

historia clínica y tampoco en la apelación, se hace referencia alguna de que se hubiera obviado este último proceder por parte de la médico.

3.3. La tesis que con fuerza defiende la recurrente, consistente en que la tipología de las obligaciones depende exclusivamente es del tipo de procedimiento a practicar y que, en este caso, por ser de aquellos “**estéticas cosméticas**”, se les aplica a rajatabla sólo el régimen de las obligaciones de resultado, **posición que a juicio de la Sala es equivocada**, pues la responsabilidad en este caso devendría no por el hecho de **NO** haberse obtenido el resultado, **sino porque ese resultado hubiese sido prometido u ofertado al paciente y exista prueba de que fue incumplido por una mala praxis médica**, circunstancia que, examinada desde el punto de vista contractual, como se vio, adolece, en palabras de la Corte en la sentencia citada *ut supra*, de un **pacto expreso, accidental**, de ese deber jurídico y profesional que hubo de asumir la Dra. Castro Valencia.

3.4. Y no podría ser de otra forma, pues estima este ponente, con respeto de las opiniones contrarias –sin comprometer lo que a ese respecto puedan opinar mis compañeros de Sala-, que se debe descartar toda responsabilidad objetiva **cuando el resultado esperado no se da por la aparición de riesgos inherentes a la misma ciencia médica y a la condición tan individual e idiosincrática de cada paciente**, como que en la práctica de la medicina confluyen demasiados componentes aleatorios propios del organismo humano y de la evolución de las enfermedades mismas que, de no ser tenidos en cuenta, truncarían de una parte el libre ejercicio médico, puesto que los galenos estarían siempre actuando a la defensiva, lo que por otro lado podría frenar el avance de la ciencia médica, en cualquier caso, con consecuencias perniciosas para el paciente.

En conclusión, bien hizo la señora jueza de primera instancia al abordar el comportamiento de la carga de la prueba de la manera como lo hizo, esto es, en torno a la demostración de los elementos que configuran la responsabilidad, bajo el alero de la culpa probada.

4. Sigue ahora para el Tribunal concluir por anticipado y, al tenor de la decisión proferida por la señora Jueza *a quo*, que el fallo impugnado ha de permanecer incólume por cuanto, si bien es cierto que los exámenes diagnósticos presentaron hallazgos compatibles con una reacción a una sustancia desconocida en la parte

facial de la paciente, por ejemplo, la resonancia de tejidos medios realizada por la actora para el **28 de enero de 2019**, tuvo como conclusión que presentaba “...*Alogenosis iatrogénica en cara sin micro abscesos ni infiltración muscular...*” (cfr. fl. 6 archivo 01 exp. digital), en esa misma línea, el informe de patología de agosto de 2019, indica que “...*los hallazgos histológicos corresponden a la presencia de una sustancia exógena que comprende la dermis y el tejido adiposo. Por favor correlacionar con la clínica y los antecedentes estéticos de la paciente...*” (cfr. fl. 6 archivo 01 exp. digital), no obstante, la parte actora no logró demostrar que esas secuelas que hoy presenta tuvieron como causa el procedimiento estético llevado a cabo por la médica cirujana Lucía Castro Valencia en julio de 2009, lo que traduce una imposibilidad de demostrar si existió impericia, negligencia, imprudencia o violación de los reglamentos y, al no existir prueba de la existencia de un nexo causal de los perjuicios que se reclaman, luego, la prosperidad de las pretensiones deprecadas están condenadas al fracaso, como se explica a continuación.

4.1. Observa entonces la Sala -como tema pacífico-, que el día 24 de julio de 2009, la señora Alejandra María Monsalve Uribe fue sometida a un procedimiento estético no invasivo por la Doctora Lucía Castro Valencia denominado *Botox* y *Surgiderm*. Dicho procedimiento fue acogido por la paciente, como remedio para corregir arrugas y ver rejuvenecido su rostro.

Este procedimiento que según se registra en la historia clínica fue exitoso, al punto que, solo quince días posteriores a su realización, acudió a otros centros estéticos para continuar con diferentes tratamientos faciales como microdermo con despigmentante y bloqueador y limpiezas con extracción en agosto 25 y en septiembre 03 lifting facial ultrasónico, hasta que, en julio 28 de 2010, es decir, un año y 4 días después del procedimiento aparece la siguiente valoración por la Doctora Lucía Castro Valencia: “...*se revisa paciente porque después de un año de tratamiento con ácido hialurónico con Surgiderm, el cual tiene su respectiva factura y consentimiento (sic) informado y además se le entrega a la paciente cuidados pos aplicación con el # del lote de botox y Surgiderm regresó porque hoy fue donde un plástico (léase cirujano plástico) el cual no dice su nombre y refiere que el doctor le palpa unas bolas en la parte interna de la mejilla y le asegura que fue silicona, la paciente viene asustada por la historia clínica y factura firmada por ella. Se le tranquiliza y se le pregunta porque no había venido antes, dice que no le prestó atención si no a que inicialmente se había quemado al parecer x fricción entre alcohol y guantes. Como*

*mejoró no le prestó más atención hasta hoy. Se le aplica radio en surcos y laser helio, **porque al examen físico no se observa en mejilla ningún granuloma ni malformación en la parte interna se palpa endurecimiento en ambos carrillos con leve dolor a la palpación, no hay enrojecimiento ni edema ni malformación**, se tranquiliza, se habla con el laboratorio que nos suministra el Surgiderm que es allegar el cual dice que el ácido hialurónico se reabsorbe al año...”*

En julio 30 de esa misma anualidad, aparece la siguiente anotación por parte de la Doctora Castro Valencia: “...se habla con otros colegas sobre el caso, y recomiendan biopsia para saber que es, ya que dicen que el ácido hialurónico no dura + (sic) de un año, se recomienda seguir con radiofrecuencia y láser de helio x 1 mes para desinflamar, se da cita para la próxima semana...” (cfr. fl. 76 archivo 1, exp. digital). De aquí en adelante, la historia clínica reporta que la señora Monsalve Uribe, en los meses subsiguientes continuó con sus tratamientos faciales e hidrofaciales, como microdermos, alta frecuencia y readiofrecuencia, mascarillas aclarantes, aplicaciones de carboxiterapia y ampollas reductoras en abdomen, laterales, cintura y piernas, se observa además que, para septiembre **15 del año 2011**, terminó un tratamiento de 5 sesiones de aplicación de láser antienvjecimiento, en **rostro**, cuello, escote y manos por parte de la Dra. Lucía Castro Valencia (cfr. fl. 65 archivo 01 exp. digital).

4.2. Precisamente, la togada recurrente se duele que en la valoración que la doctora Castro Valencia le realizó a Alejandra Monsalve aquel 28 de julio de 2010, haya malinterpretado los síntomas que ésta presentaba, como abultamiento de los surcos nasogenianos y en el labio izquierdo, además que hizo caso omiso de los exámenes que le recomendaron sus colegas, respecto de una biopsia para emprender un tratamiento. Lo anterior, lo relaciona la recurrente con la aplicación de una sustancia desconocida y, con la alteración de la historia clínica de la demandante, según argumenta, debido a que la Doctora Castro Valencia puso un sticker de un producto como Surgiderm, que no estaba autorizado por el Invima en el país en el 2009.

Como bien lo dice la misma recurrente, la indicación del médico Juan esteban Vargas sobre la realización de una biopsia, no pasó de ser una simple recomendación de un colega que fue indagado por su concepto, pero la elección de la conducta a seguir correspondía por entero a la autonomía de la médico cirujana estética, por la sencilla razón que era su tratante y, en efecto, optó por

realizar palpación en la respectiva zona facial y no encontró signos de alarma para sospechar de bolas en las mejillas, abultamiento o deformación en la magnitud que pretende hacerlo ver la demandante y que ameritaran un protocolo de atención mandatorio que la Doctora haya omitido culposamente, como lo sugiere la recurrente. Resultan un contrasentido asegurar que con posterioridad al procedimiento de botox y Surgiderm tenía dolores, enrojecimientos, deformación o abultamiento propias de una reacción inflamatoria compatible con un cuerpo extraño y, que, por otro lado, a tan solo 15 días haya continuado tratándose la zona facial con procedimientos estéticos que interfieren en los tejidos blandos del rostro, así mismo, posterior a la valoración con la Dra. Castro Valencia, en julio de 2010, continuó con procedimientos inyectables y aplicación de laser de rejuvenecimiento, en la misma clínica y con la misma doctora Lucía Castro Valencia.

4.3. Ahora bien, buena parte de la censura señala entonces la deficiente labor interpretativa de la prueba, concretamente la testimonial rendida por los galenos, médicos cirujanos que en su momento valoraron a la señora Alejandra Monsalve Uribe, Doctores David Amaya Delgado y Juan Esteban Vargas, ofreciendo por este flanco a la recurrente su propio análisis de la prueba para desdibujar lo decantado en la sentencia, advirtiendo, entonces, que dichos galenos fueron claros en señalar que la sustancia estaba indurada, y que esa reacción no es propia del producto ácido hialurónico de Surgiderm del laboratorio Allergan, pero esas manifestaciones no necesariamente conducen al particular resultado probatorio favorable a sus intereses que sugiere la recurrente, es decir, que los síntomas hayan sido la aplicación de una sustancia desconocida y que necesariamente eso fue lo que hizo mal la médico demandada, cuando, por el contrario, ella ha demostrado cómo aplicó el producto que era seguro y frente a los ojos y vigilancia de la paciente y con su consentimiento.

Ciertamente, quien testificó por la parte demandante Dr. David Amaya Delgado y, por la parte demandada Dr. Juan Esteban Vargas Duque, son personas con conocimiento especializado que dominan y entienden la especialidad de este tipo de intervenciones cosméticas no invasivas. Al pasar por el tema de las declaraciones de los testigos técnicos, quiere la Sala indicar que la Corte Suprema de Justicia ha admitido que es de recibo esta prueba **sucedánea a la pericial**, sentenciando que “...en la legislación probatoria colombiana se le concede eficacia de tal índole a esta clase de medio, que **refuerza enormemente**

el testimonio para darle mayor credibilidad, debido a su idoneidad, pero aún más cuando se trate de galenos que han auscultado personalmente al enfermo...⁴

Pero lo cierto es que al analizar al detalle sus declaraciones, ambos profesionales coinciden en que el denominado biopolímero es el nombre que se le da a una sustancia que no sea reabsorbida por el cuerpo y permanezca en él, por más de 12 meses, generando reacciones inflamatorias y endurecimientos, como ocurre en la actualidad con la señora Monsalve Uribe, según los exámenes diagnósticos de Resonancia de Tejidos Blandos, biopsia y Patología, pero, en parte alguna de su argumentación, atribuyen ese hecho ya demostrado, incluso desde la fijación misma del litigio, al procedimiento realizado por la doctora Lucia Castro Valencia en el año 2009.

4.4. El Dr. David Amaya quien atendió a la paciente en el año 2019 debido a que le fue remitida de una clínica estética llamada CMEI, indica que las quejas y patologías estéticas anotadas en la historia clínica, referentes a la aplicación de sustancias de diez años atrás, fue lo que le contó la misma señora Alejandra Monsalve Uribe, es decir, su registro clínico, en ese punto que nos interesa, parte de lo que le contó la misma paciente, no fue un hallazgo médico o científico que causalmente pudiera vincularse con la atención brindada diez años atrás por la Dra. Lucía Castro Valencia, por eso, esa solitaria apreciación no la comparte la Sala, porque sería tanto como permitirle a la parte interesada pre-constituir su propia prueba, en desmedro del principio de necesidad de la misma previsto por el artículo 164 del C. G. del P.

Ante la pregunta del abogado de la Clínica demandada sobre otros procedimientos estéticos realizados por la actora, este galeno desconocía de la historia clínica misma, que la señora Alejandra María Monsalve Uribe, tal y como ella misma lo confesó en su interrogatorio de parte, para el año 2012 se realizó no solo un perfilamiento de nariz, si no otro en los labios, sobre este último, la actora no supo o no quiso decir la época de su realización, procedimientos que sin duda requieren de aplicación de ácido hialurónico para rellenar espacio, llámese Surgiderm o Juverderm, por modo que, bien podía compartirse lo que ambos galenos manifestaron, incluyendo el Dr. Juan Esteban Vargas Duque,

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación Civil del 15 de febrero de 2008, Exp. No. 41001-3110-001-1999-00269-01. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda.

Médico y Cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana con posgrado en Cirugía Plástica, Estética, reconstructiva Maxilofacial y de la Mano en la Universidad de Antioquia, respecto a que, era imposible determinar en cuál procedimiento se pudo haber aplicado la sustancia que actualmente -para 2019- muestran los diagnósticos, explicando entonces que esa sustancia, conocida generalmente como biopolímeros o aloplásticos, independiente del lugar de aplicación, puede migrar y afectar en varios centímetros otras zonas no invadidas y **su comportamiento es indeterminable**. En otras palabras, si se aplica una sustancia extraña en labios o nariz de cualquier persona, es probable que se produzca alojenosis iatrogénica en surco nasogeniano y, con mayor razón en los labios, debido al impredecible comportamiento de la sustancia, hecho que tiene finalmente una repercusión grandísima en la prueba de la causalidad que pueda ser atribuida a la doctora Castro Valencia.

4.5. Además de lo anterior, la Sala también coincide con la funcionaria de primera instancia, en señalar que la certificación allegada por el laboratorio Allegarns es determinante para deducir que, contrario a lo que alega la parte recurrente, el producto sí estaba presente en Colombia desde 2006 y 2007 y, con mayor razón, para la fecha del procedimiento, solo que no estaba siendo distribuido directamente por Allegarn Colombia sino por Panagro, al respecto la certificación indica:

“Con la presente Allergan de Colombia S.A. identificado con NIT 860.029.441-1 certifica que la Dra. Lucía Beatriz Castro Identificada con C.C.43.587.541 de Medellín, mantiene una excelente relación comercial desde marzo de 2007 con (PANAGRO) en Medellín, quién es un distribuidor autorizado de ALLERGAN, (adjuntamos certificación del distribuidor).

La Dra. Lucia Beatriz Castro ha participado en entrenamientos constantes sobre técnicas de aplicación de las diferentes referencias de Ácido Hialurónico (Surgiderm®/Juvederm®) y Toxina Botulínica (BOTOX®) desde el año 2007.

Así mismo, ratificamos que el producto Surgiderm® 30XP (2 x 0,8ml) fue registrado en Colombia inicialmente por otro titular desde el 22 de junio de 2006 y transferido a Allergan de Colombia el 9 de enero de 2008. Confirmamos que desde la transferencia a Allergan hasta el vencimiento del Registro Sanitario no se reportaron lotes defectuosos, el registro de este producto no fue renovado debido a una evolución de la tecnología...”

Entre tanto, la sociedad Panagro S.A.S. allegó al siguiente certificación:

“certifica que la Dra. Lucía Beatriz Castro con cédula 43.587.541 es nuestra cliente desde septiembre del año 2007 y ha adquirido nuestros productos (botox y fillers) debido a que somos un distribuidor certificado por las Dirección Seccional de Salud y a que todos los productos que distribuimos cumplen con los requerimientos de calidad exigidos por el INVIMA. Certificamos también que en el mes de julio del año utilizó el producto Surgiderm 30XP con lote XP30532757 adquirido con la factura 58450 del 16 de julio de 2009, este producto cumple con todos los estándares, posee su respectiva ficha técnica y registro sanitario. Durante más de 15 años en los que hemos distribuido este producto nunca se ha presentado ningún inconveniente, de igual manera, solicitamos al laboratorio nos haga llegar una certificación de esta información...”

4.6. No logra desvirtuar la fuerza probatoria de estas certificaciones respecto a que el producto fue adquirido por la Dra. Castro Valencia para la fecha del procedimiento, el argumento de la recurrente, relacionado con que el daño pudo provenir de la aplicación del Surgiderm, pero cuando este ya había perdido su vida útil, es decir, posterior a los 24 meses, en primer lugar, porque de tal caducidad del medicamento no hay una prueba certera, pero, tal vez, lo más importante que el fundamento de su demanda no fue diverso a que se le aplicó una sustancia desconocida, no el producto Surgiderm ácido hialurónico pero cuando estaba vencido, de modo que, no puede aceptarse que a la hora de apelar, **exprese un interés distinto al inicialmente manifestado**, pues ello implicaría desconocer el derecho de defensa de la parte demandada, la cual asumió su posición de acuerdo con los hechos planteados en el escrito de demanda.

Sostener esa tesis, además, es ir contra de la prueba diagnóstica arrimada por la misma demandante, merced a que, conforme el testimonio de los expertos que declararon en el proceso, especialmente el Dr. Juan Esteban Vargas, no es posible identificar con especificidad el tipo de sustancia extraña que ocasiona la respuesta del sistema inmune en el cuerpo. La imagenología, en estos casos, sirve para localización de la sustancia, mientras que, la biopsia revela un estudio patológico, muestra linfocitos y cuerpos mononucleares que ocasionan la inflamación del tejido blando, pero ninguno identifica el tipo de sustancia, luego, mal podría argüirse que se trata de ácido hialurónico vencido, a más que todavía quedaría faltando la prueba del nexo causal sobre los efectos que esa específica sustancia produjo en el rostro de la paciente.

4.7. Tampoco encuentra forma la Sala de deducir razonablemente de las anotaciones inmersas en la historia clínica o de los testimonios obrantes en el proceso, si las afecciones que sufre la señora Monsalve Uribe aquí demandante, al día de hoy, **son consecuencia directa del procedimiento estético realizado en julio del año 2009 por la Dra. Lucía Castro Valencia**, pues aparece demostrado que la señora fue intervenida en la misma zona facial, cuando acudió al centro estético denominado *Quality life*, en el año 2012, con la denotada intención de realizarse perfilamiento de nariz y de labios.

Según se observa entonces, existían una multiplicidad de factores que pudieron ocasionar la actual situación médica facial de la señora Monsalve Uribe, pues aún después del procedimiento para la aplicación de Botox y Surgidem en julio del año 2009, continuó realizándose procedimientos no invasivos en su rostro, ellos, relacionados con la aplicación de ácido hialurónico en la zona que resultó afectada, lo cual hace que se extrañe una ilustración científica en tal sentido, pues para esta judicatura no es posible, con base en las exámenes diagnósticos arrimados al proceso de fecha 2019, con los testimonios de los médicos David Delgado Amaya y Juan Esteban Vargas Duque, o con la documental obrante en el proceso, dilucidar con margen de certeza científica si el procedimiento al que se sometió la paciente en el año 2009 de Botox con relleno facial con ácido hialurónico Surgiderm, fue la causa determinante del resultado dañoso y, por ahí mismo, calificar de culposa o no la actividad de la Dra. Lucía Castro Valencia.

4.8. Como se dijo, si el resultado de la aplicación del Botox y Ácido Hialurónico, **no fue el esperado**, esa sola circunstancia no puede concebirse como factor de atribución de responsabilidad, ya que el procedimiento *per se* no acredita culpa o negligencia del médico, así mismo, aunque el hecho de un abultamiento o inflamación resultara ser cierto a partir de la prueba documental fotográfica allegada, sea que se haya aportada original o en copia, no obstante, no sirve como prueba de que aquel haya tenido el génesis o causalidad en conductas atribuibles a la galeno demandada, máxime cuando para esa fecha de agosto de 2009, la actora ya venía con tratamientos faciales como microdermo con despigmentante y bloqueador y limpiezas con extracción, que de una u otra forma también pudieron generar determinadas reacciones cuya causa no se dilucida con la simple observación de una fotografía y menos, si se ha prolongado durante 13 años, como lo sugiere la parte demandante.

Habiéndose realizado voluntariamente posteriores procedimientos y, sin que haya prueba o registro de una mala condición en la zona facial nasogeniana proveniente de la aplicación de Botox y Surgiderm en julio de 2009, lo que se sigue son meras especulaciones sobre la causalidad, máxime cuando debe tenerse en cuenta que la Dra. Gloria Patricia Bustamante quien realizó el perfilamiento de nariz y la profesional que realizó el perfilamiento de labios a la señora Alejandra María Monsalve Uribe en abril de 2012, necesariamente hubo de explorar esa zona facial, utilizando la técnica de relleno dérmico como Ácido Hialurónico y, por eso, sólo incertidumbre se yergue sobre la causalidad para atribuir alguna responsabilidad a la Dra. Lucia Castro Valencia, por lo que siendo el nexo causal uno de los elementos axiales de la responsabilidad civil aquí demandada, consistente en predicar que, ocurrido un daño, su causa es la conducta desplegada por el agente, a **quien se le endilga su causación**, pero resulta que aquí no hay prueba para inferir que la alojenosis iatrogénica en la dermis facial de la señora demandante sea un efecto del comportamiento culposo e imperito del demandado.

4.9. De modo que las reflexiones teóricas que en este punto hizo la funcionaria no merecen ningún reproche, pues, para que tenga cabida la responsabilidad o no quede duda de su existencia, la conducta del demandado, activa u omisiva, debe haber sido la causa adecuada y eficiente para la producción del daño cuya reparación se solicita, memorando que, solo es causa del daño: la condición que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir un resultado, añadiendo, que tal y como lo señala la autora española CECILIA WEINGARTEN, en el ámbito médico:

“...la conexión causal entre una acción y un determinado resultado debe ser establecido con arreglo a criterios científicos. Dada la índole de las cuestiones que se dilucidan y las características del hecho generador del daño, únicamente es la ciencia médica la que puede verificar si un hecho puede producir regular y normalmente y conforme el curso científico causal, un determinado resultado. Sólo la ciencia legitimará la comprobación de un curso causal que desde el antecedente lleve al consecuente...”

“...Ese contenido específico de la medicina impone que el “hacer” profesional del médico se integre con los métodos, técnicas y procedimientos establecidos por la ciencia médica, desarrollando una conducta acorde con la misma, sin perjuicio de la discrecionalidad científica que le permite optar entre distintas alternativas que la medicina admite, conforme el desarrollo científico progresivo ...”

“... De allí que el médico solo satisface (cumple jurídicamente) su prestación, mediante una actividad técnica y científicamente adecuada, que normal y

ordinariamente pueda conducir a cierto resultado, aunque este no pueda garantizarse...”

“...Si el médico actúa conforme a un criterio de discrecionalidad científica, optando por alguna de las variables objetivamente idóneas de acuerdo a las reglas de la medicina y conforme a la adecuación de las circunstancias en concreto, no introduce causalidad alguna para la producción del daño...”⁵

Ciertamente la causalidad no es un asunto de poca monta, como que a no dudarlo la doctrina y la jurisprudencia han hecho ingentes esfuerzos argumentativos para definirlo y perfilar su contorno, pues, en ocasiones ese nexo o ligazón puede resultar fácilmente; en cambio, en otras ocasiones resulta etéreo o difuso, sobre todo en estos casos, donde surgen preguntas relevantes sobre los efectos de ese nuevo procedimiento en la humanidad de la paciente, por ejemplo: ¿cuáles eran las condiciones de la señora Monsalve Uribe, para el momento de los otros procedimientos que se realizó? ¿Pudo obedecer su actual condición a una mala práctica en los múltiples procedimientos inyectables anteriores que se realizó tanto en la clínica demandada como en otros centros de estética? si es así ¿a cuál de ellos? o, se debió a ¿una conducta negligente de la propia paciente? ¿Qué consecuencias trajo para la recuperación del procedimiento, la realización de tratamiento faciales como microdermos, sesiones de láser de rejuvenecimiento, mascarillas faciales, liftin, ultrasónicos, radiofrecuencias, a solo pocos días de realizado aquel?

Como se dijo, pueden confluir muchas causas en la producción del daño que reclama la demandante, por consiguiente, su tarea, a voces del artículo 167 del C. G. del P., era valerse de un concepto **científico** que diera luces al estrado, debido a la inopia de su conocimiento clínico, respecto de las **implicaciones que esa intervención no invasiva realizada en 2009 por la Dra. Lucía Castro Valencia, pudo cobrar en la zona intervenida y que se hubiere prolongado diez años sin incidencia de otros procedimientos estéticos de igual naturaleza realizados con posterioridad,** en los términos establecidos en la especialidad de la medicina estética no quirúrgica, prueba científica que contrario a lo que indica la recurrente, brilla por su ausencia en el presente proceso.

5. Corolario de lo aquí expuesto, es que al no demostrarse el elemento culpa y/o nexo causal, como elementos estructurantes de la responsabilidad médica aquí demandada, no puede hacerse lugar a la misma y, por consiguiente, se impone

⁵ WEINGARTEN Cecilia. Revista de Responsabilidad Civil y del Estado No. 5 de julio de 1998.

confirmar la sentencia acusada y así se declarará. Por esa misma razón, el estudio de la condena solidaria a la Clínica Antienvjecimiento S.A.S., que exige la recurrente, se torna inane, pues lo que franquea la puerta para su estudio, es precisamente la configuración de todos los elementos axiales de la pretensión.

Finalmente, se condenará en costas de segunda instancia a la demandante a favor de la parte demandada, tras la resolución desfavorable de su recurso.

De esta manera y con fundamento en las precedentes consideraciones, el ***Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín***, Sala Cuarta de Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: SE CONFIRMA, el fallo proferido por el Juzgado Vigésimo Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Envigado, el día 27 de agosto de 2021, dentro de la presente acción de responsabilidad civil médica, sin embargo, se revoca el numeral primero de la resolutive, para en su lugar, concluir que la absolución de las pretensiones en contra de la Clínica Antienvjecimiento S.A.S., no es por falta de legitimación, sino por falta de prueba de los elementos estructurantes de la pretensión, ello, de conformidad con las consideraciones en que está sustentada la presente providencia,

SEGUNDO. Se condena en costas de segunda instancia a la parte demandante, en favor de la parte demandada, tras la resolución desfavorable de su recurso. para el efecto, en su momento procesal, se fijarán las respectivas agencias en derecho por el magistrado sustanciador.

TERCERO: Cumplida la ritualidad secretarial de rigor, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, DEVUÉLVASE Y CÚMPLASE,



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
Magistrada



JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado